

MINUTA LEGISLATIVA

Chile está atravesando una de las mayores crisis de seguridad de los últimos tiempos: La delincuencia se encuentra desatada y es una constante amenaza a la tranquilidad de los ciudadanos. Esta ola delictiva sin precedentes, tiene a esta materia como la principal preocupación de los chilenos.

El avance de la delincuencia, ha generado una modernización en la forma en que se desarrolla la criminalidad, especialmente a través de las organizaciones delictivas, que desarrollan verdaderos esquemas con escalafones para poder ejecutar su cometido.

En la zona norte del país, el tráfico de estupefacientes ha dejado en descubierto la manera en que operan estos grupos organizados, quienes poseen armamento militar de alto calibre para llevar a cabo sus acciones delictuales.

Estas bandas pueden dotarse de este tipo de instrumentos mediante el transporte transfronterizo que se genera en relación al dinero en efectivo que mueven de un país a otro. Esto, motivadas debido a la dificultad que estas poseen para acceder al sistema financiero formal, teniendo que ejercer este tipo de acciones a fin de materializar el lavado de activos.

Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo de lo anteriormente señalado, el 26 de junio del presente año, se ejecutó una operación que permitió interceptar una organización que se dedicaba al contrabando de oro, diamantes y dinero en efectivo, la cual buscaba financiar terrorismo. Sólo en el Paso Fronterizo Colchane, se incautaron 250.000 dólares, los cuales eran transportados en cabinas de camiones.

Si bien las policías han desarrollado una serie de acciones estratégicas que han permitido desbaratar estas bandas, es necesario disponer de mayores herramientas para combatir este tipo de delitos, que tienen como fin último financiar el crimen organizado que tanto daño está causando a las familias chilenas.

Por lo anterior, la Senadora Ebensperger junto a los Senadores Araya, Galilea, De Urresti y Walker, se encuentran impulsando un texto que busca modificar diversos cuerpos legales con la finalidad de incluir en el delito de contrabando el ingreso o la extracción de dinero desde o hacia el territorio nacional (boletín Nº 15.252-07).

En la actualidad, la legislación señala a través de la ley Nº 19.913, el deber de informar al Servicio Nacional de Aduanas mediante una declaración, aquellas

personas que porten o transporten moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los 10.000 dólares o su equivalente en monedas. La sanción por incumplir esta norma, corresponde a una multa a beneficio fiscal de hasta el 30% de la moneda en efectivo o el valor de dichas monedas o instrumentos que no fueron declarados.

El texto que promueven los legisladores busca incorporar en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas considerar como parte de la figura típica en el delito de contrabando al que introduzca o extraiga del país dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador, por lugares no habilitados o sin dar cuenta de estos al Servicio Nacional de Aduanas. De igual modo, se busca incluir la hipótesis de omisión o falsedad en la respectiva declaración que se estipula en el artículo 4 de la Ley Nº 19.913. Las sanciones quedarán establecidas en base al valor nominal o su equivalente de la mercancía o dinero en efectivo que se encuentren afectos al ilícito.

MINUTA LEGISLATIVA

Durante los últimos dos años, se está desarrollando en nuestro país un fenómeno criminológico que captura la atención de la ciudadanía, producto de la gran conmoción que este genera, provocando así una sensación de inseguridad en las personas. La alerta está dada por el gran incremento que han registrado los delitos de robo de vehículos con fuerza y/o intimidación, a través de las llamadas 'encerronas', 'portonazos', 'abordazos' y sus derivados.

En lo que va del 2022, este ha sido uno de los principales problemas para las policías: Sólo en estos meses se han registrado 5.629 casos de robo violento de vehículos, en donde las encerronas, portonazos y abordazos concentran el 66% de las denuncias estos ilícitos. Expertos señalan que la región Metropolitana enfrenta la peor ola de inseguridad de los últimos 20 años.

El modus operandi del 'portonazo', se caracteriza porque los delincuentes esperan que las víctimas salgan de sus casas, o cuando estas llegan a sus domicilios, para así desarrollar el atraco en el momento exacto, mediante el cual se bloquea el paso del vehículo y abordan al conductor forcejeando con este e intimidándolo generalmente con un arma de fuego. Para este tipo de robo, se suele aprovechar la oscuridad de la noche, empleando el factor sorpresa y buscando siempre la superioridad numérica de los delincuentes frente a la víctima. Según cifras proporcionadas por Carabineros, este tipo de delitos incrementó en un 115% durante el último año.

Por su parte, la 'encerrona', corresponde a una evolución derivada del 'portonazo', en donde intervienen varios delincuentes, quienes proceden a encerrar -a través de dos vehículos- a un conductor que va circulando por la vía para arrebatarse el suyo en la marcha. Ambos delitos están caracterizados por un alto grado de violencia, que ocurre generalmente mediante las amenazas con armas de fuego.

Este tipo de delitos está lejos de ser hechos aislados y robos improvisados por delincuentes comunes. La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con Carabineros y la Fiscalía, revelan que existen verdaderas bandas organizadas que se dedican a ejecutar este tipo de ilícitos. Según las investigaciones impulsadas por estas instituciones, existe un verdadero engranaje que va desde la comercialización de los vehículos por piezas, hasta la reventa ilegal y atracos por encargo que pueden llegar a costar hasta \$600.000 por auto robado.

Los puntos más conflictivos y que indican en donde más se reiteran este tipo de delitos, son la ruta 68 en intersección con Vespucio Norte; Vespucio Sur, entre Avda. Pajaritos y Segunda Transversal; entre Autopista Central y General San Martín; camino a Melipilla, intersección Vespucio Sur; Autopista Central, intersección Vespucio Sur; Costanera Norte, intersección Autopista Central; Costanera Norte, intersección Vespucio Norte; Vespucio Norte, intersección Avenida Recoleta; Gran

Avenida, intersección Vespucio Sur; Costanera Norte, intersección General Velásquez; Avenida Las Rejas Sur, intersección calle Mailef.

Si bien es cierto, la Ley N° 21.170, conocida popularmente como la ley antiportonazo establece la obligatoriedad por parte de las aseguradoras de incluir, sin cobro adicional, la entrega de dispositivos de localización GPS en la contratación de las pólizas de seguro para vehículos motorizados, los cuales deberán ser instalados y activados exclusivamente por el propietario del vehículo. Esto último, dificulta y propicia una ineficacia por parte de la normativa, puesto que deja a responsabilidad del asegurado el funcionamiento de estos dispositivos, en consecuencia, en que el propietario del vehículo se encuentra pagando una prima mensual o anual a fin de resguardar sus bienes.

Por lo anterior, los Senadores Insulza y Elizalde, han ingresado a discusión un proyecto de ley (boletín N° 15.272-07), que busca modificar diversos cuerpos legales con el objeto de desincentivar el robo de vehículos y la comercialización de sus partes y piezas. Así, dentro de lo que buscan modificar los parlamentarios es la ley previamente mencionada, buscando establecer la obligación por parte de las empresas aseguradoras, la instalación, mantención y servicio de monitoreo de los dispositivos GPS, respecto de vehículos nuevos y para aquellos livianos cuyo año de fabricación sea igual o posterior al año 2002, y que no cuentan con la contratación de seguros, la responsabilidad tanto de la instalación, mantención y servicio de monitoreo sea con cargo a la responsabilidad del propietario de dicho vehículo motorizado.

De igual forma, el texto impulsado por los Senadores busca modificar la Ley N° 21.170, que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos, y establece las medidas que indica, agregando la obligatoriedad de individualizar las partes y piezas más importantes y que generalmente son objeto de compraventa, incorporando en ellas un número identificador con el vehículo y que tratándose de la primera venta, sea la automotora quien se responsabilice por la existencia de dichos números, cuando se trate de vehículos usados cuyo año de fabricación sea igual o posterior al 2002, corresponda a los dueños encargarse de que dichos números se consignen en las partes o piezas que se establecen en la ley, teniendo presente que la ejecución de esta será inspeccionada en la respectiva revisión técnica de todos los años.

Otro aspecto que persigue abordar la propuesta de los parlamentarios, es la arista que dice relación con las fórmulas que existen para 'blanquear' los vehículos robados a través de las prácticas dispuestas por los delincuentes. Para ejecutar dicho ilícito, se emplean personalidades jurídicas que se crean con ese propósito, mediante la plataforma de empresa en un día.

El objetivo de estas organizaciones criminales es comercializar estos vehículos robados, una vez que se adultera el número de chasis, empleando empresas para aquello. Estas sociedades creadas mediante la plataforma 'empresa en un día', poseen Rol Único Tributario (RUT), y a su vez, instrumentos como guías de despacho y facturas electrónicas que permiten volver a introducir al mercado los vehículos 'clonados'.

La ley N° 20.659, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, y que dio origen a las empresas en un día, busca ser modificada, evitando que aquellas sociedades cuyo giro dice relación con la comercialización de vehículos motorizados, puedan acceder al RUT, inicio de actividades y los instrumentos tributarios de forma electrónica, y que por el contrario, deban dirigirse de forma presencial a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII), para proceder con el trámite y ser evaluados por los ejecutivos y profesionales respectivos.

De igual forma, se plantea la modificación del artículo 3 de la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, buscando establecer la obligación por parte de las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados o motocicletas nuevas o usadas, de informar respecto de operaciones sospechosas que se adviertan en el ejercicio de sus actividades. También, se pretende modificar el artículo 6 de la misma ley, agregando un inciso final en el sentido de que aquellas empresas de dicho rubro, tengan prohibido percibir pagos en efectivos para aquellas transacciones que superen las 300 Unidades de Fomento (UF).

En la modificación que se sugiere a la ley anteriormente señalado, se busca incluir como delitos bases para la comisión del lavado de activos, los delitos contra la propiedad, sancionando con penas de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multas de 200.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para quienes oculten o disimulen el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de delitos contra la propiedad.

El proyecto también busca modificar el artículo 192 de la Ley de Tránsito N° 18.290, estableciendo como delito el hecho de conducir un vehículo sin placa patente o que no posea un dispositivo de geolocalización GPS.

Finalmente, y para dotar de aún más herramientas que permitan afrontar este tipo de ilícitos, se busca unificar esfuerzos tanto públicos como privados, modificando la ley N° 19.496, que regula las normas sobre protección de los derechos de los consumidores, buscando establecer que los proveedores de servicios de estacionamientos con acceso a público general, dispongan de un sistema de control de acceso que permita el reconocimiento automático de patentes de vehículos motorizados. De esta forma, se busca crear un registro unificado que permita acceder a ambas policías a esta información en tiempo real, reconociendo y

geolocalizando aquellos autos que poseen encargo por robo y que son detectados por estos dispositivos tecnológicos instalados en los espacios de estacionamiento privado y cuyo flujo de vehículos responden a acceso público (establecimientos comerciales, clínicas, supermercados y otros).

